

Resolución 233/2021, de 26 de noviembre, de la Comisión de Transparencia de Castilla y León

Asunto: expediente CT-291/2021 / reclamación frente a la denegación de una solicitud de información pública presentada por D. XXX ante el Ayuntamiento de León

I. ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 1 de abril de 2021, D. XXX, en calidad de Delegado Sindical en el Ayuntamiento de León, registró a través de la sede electrónica de este Ayuntamiento una solicitud de información pública. En concreto, en relación con la provisión de vacantes previstas en la Orden General del Cuerpo de la Policía Local de León 6/2020, de 21 de enero, se solicitó el acceso telemático a siguiente documentación:

“1- Relación de aspirantes que concurren a cada proceso de cobertura de vacantes.

2- Relación detallada de los méritos aportados por cada aspirante concurrente a cada proceso de cobertura de vacantes, especificando, denominación del mérito, la duración o nivel del mérito aportado, así como la entidad que lo certifica o expide.

3- Actas de las valoraciones de los méritos aportados por los concurrentes en cada procedimiento, en el que se especifique la valoración efectuada a cada uno de los méritos presentados, conforme a las normas contenidas en la nota informativa de la Jefatura de 17 de mayo de 2010”.

Segundo.- Con fecha 2 de julio 2021, tuvo entrada en la Comisión de Transparencia de Castilla y León una reclamación presentada por D.XXX, frente a la inicial falta de respuesta a la solicitud de información pública indicada en el expositivo anterior.

Del mismo modo, con fecha 6 de julio y 31 de agosto de 2021, tuvieron entrada en la Comisión de Transparencia sendos escritos presentados por el reclamante, poniendo de manifiesto que, a pesar de la respuesta dada por el Ayuntamiento de León a su solicitud de información, *“la documentación recibida no se corresponde con la solicitada, por cuanto no aporta la información requerida como punto 2 acerca de los méritos aportados por cada aspirante concurrente, especificando, denominación del mérito, la duración o nivel del mérito aportado, así como la entidad que lo certifica o expide. Tampoco se detalla la información requerida en el punto 3, es decir los méritos aportados por los concurrentes al procedimiento,*

en el que se especifique la valoración efectuada a cada uno de los méritos presentados, conforme a las normas contenidas en la nota informativa de la jefatura de 17 de mayo de 2010”.

Tercero.- Recibida la reclamación anterior nos dirigimos al Ayuntamiento de León, poniendo de manifiesto su recepción y solicitando que nos informase sobre la presunta ausencia de respuesta que había dado lugar a la citada impugnación.

A través del justificante expedido al efecto, consta la recepción de esta petición de información por comparecencia en sede electrónica con fecha 31 de agosto de 2021, y conforme a lo establecido en el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se entiende rechazada su notificación.

Sin embargo, el informe solicitado no ha sido recibido en esta Comisión de Transparencia. No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se prosiguen las actuaciones y se procede a adoptar la presente Resolución.

Sin perjuicio de ello, lamentamos que nos veamos obligados a resolver esta reclamación sin conocer el criterio del Ayuntamiento de León, quien, sin duda, podría aportar elementos de juicio relevantes para decidir acerca del supuesto aquí planteado. Esta falta de respuesta, además, supone un incumplimiento de la colaboración debida al Comisionado de Transparencia, en cuanto Presidente de esta Comisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por la propia Ley. Añade este precepto que, en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica.

El artículo 24 de la misma norma dispone que frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG), con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa.

Segundo.- La disposición adicional cuarta de la misma Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 citado

corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. En Castilla y León ese órgano es esta Comisión de Transparencia a quien corresponde la tramitación y resolución de aquella reclamación, ajustándose a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC).

En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, se crea la Comisión de Transparencia para el conocimiento y resolución de las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su impugnación contencioso-administrativa, se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública dictadas por los organismos y entidades del sector público autonómico relacionadas en el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León; por las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma; por las Entidades Locales de Castilla y León y su sector público; y por las asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos.

En consecuencia, esta Comisión es competente para resolver la reclamación antes identificada.

Tercero.- La reclamación ha sido presentada por D.XXX, quien se encuentra legitimado para ello puesto que es la misma persona que presentó la solicitud de información que dio lugar a la impugnación citada.

Cuarto.- Por lo que respecta al tiempo y forma de la reclamación, hay que tener en consideración lo dispuesto en el artículo 24.2 de la LTAIBG, según el cual:

“La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo”.

Por otro lado, el artículo 20.1 de la LTAIBG establece:

“La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.

Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo haga necesario y previa notificación al solicitante”.

En este supuesto concreto, la reclamación fue registrada ante esta Comisión de Transparencia el 2 de julio de 2021, después de que la solicitud de información pública fuera realizada a través de un escrito presentado el 12 de abril de 2021.

En todo caso, la presentación de reclamaciones frente a las desestimaciones presuntas de las solicitudes de acceso a información pública por no haber sido resueltas expresamente no se encuentra sujeta a plazo, todo ello conforme a lo previsto en los artículos 20.1, 20.4 y 24.2 de la LTAIBG, así como conforme al criterio del CTBG, expresado en su Criterio Interpretativo CI/001/2016, de 17 de febrero de 2016, a partir de la jurisprudencia fijada por el Tribunal Constitucional acerca de los plazos para recurrir el silencio administrativo negativo y las previsiones de la LPAC, relativas a la interposición de los recursos de alzada y de reposición.

No obstante, durante la tramitación del presente procedimiento de reclamación se ha puesto de manifiesto que la solicitud de información pública cuya desestimación presunta se impugna fue resuelta por el Ayuntamiento de León mediante la Resolución de fecha 9 de julio de 2021, siendo notificada al solicitante el día 19 de julio de 2021. En consecuencia, con posterioridad a la presentación inicial de la reclamación tuvo lugar la resolución expresa de la solicitud de información presentada por el reclamante, el cual con fecha 31 de agosto presentó un escrito ante esta Comisión de Transparencia poniendo de manifiesto su oposición a la respuesta dada por el Ayuntamiento de León a su solicitud de información. Este último escrito ha sido transcrito parcialmente en el expositivo segundo de los antecedentes.

Las reclamaciones frente a las resoluciones expresas en materia de acceso a la información pública deben ser presentadas dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la fecha de su notificación (artículo 24.2 de la LTAIBG). En el supuesto aquí planteado, la disconformidad con la Resolución adoptada por el Ayuntamiento de León se puso de manifiesto ante esta Comisión por el reclamante una vez que había transcurrido aquel plazo. Sin embargo, en la notificación de la Resolución municipal no se hacía referencia a la posibilidad de interponer la presente reclamación en materia de derecho de acceso a la información pública ante esta Comisión de Transparencia. En consecuencia, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 40.3 de la LPAC y, por tanto, aquella notificación defectuosa solo surtió efecto a partir de la presentación de las alegaciones ante esta Comisión en las que el reclamante expresa lo manifestado “ut supra”, en el sentido de que no ha tenido lugar el acceso a la totalidad de la información pública pedida.

Quinto.- Como cuestión previa al análisis de la ausencia de actuación administrativa impugnada, y considerando que quien presentó las solicitudes de información cuya denegación presunta se impugna ha sido un cargo sindical en el Ayuntamiento de León, debemos determinar la aplicación de la LTAIBG y, por tanto, de este mecanismo de reclamación a las peticiones de información formuladas por quienes cumplen ciertas funciones en el marco del ejercicio de la actividad sindical.



En este sentido, se debe partir de lo dispuesto en el punto 2 de la disposición adicional primera de la LTAIBG, de conformidad con el cual: *“Se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información”*.

Pues bien, como ya hemos señalado, entre otras, en nuestras resoluciones 91/2017, de 25 de agosto (expte. de reclamación CT-70/2017), 127/2017, de 17 de noviembre (expte. de reclamación CT-31/2017) y 62/2020, de 17 de abril (expte. de reclamación CT-35/2019), al respecto procede exponer que el CTBG en su Criterio Interpretativo CI/008/2015, de 12 de noviembre, ya expresaba lo siguiente:

“(…) IV. La disposición adicional primera de la LTAIBG vincula la aplicación supletoria de la Ley a la existencia de una norma específica que prevea y regule un régimen de acceso a la información, también específico.

En consecuencia, sólo en el caso de que una norma concreta establezca un régimen específico de acceso a la información pública en una determinada materia o área de actuación administrativa, puede entenderse que las normas de la LTAIBG no son de aplicación directa y operan como normas supletorias. En opinión del Consejo, la mencionada disposición adicional tiene como objetivo la preservación de otros regímenes de acceso a la información que hayan sido o puedan ser aprobados y que tengan en cuenta las características de la información que se solicita, delimite los legitimados a acceder a la misma, prevea condiciones de acceso etc. Por ello, sólo cuando la norma en cuestión contenga una regulación específica del acceso a la información, por más que regule exhaustivamente otros trámites o aspectos del procedimiento, podrá considerarse a la LTAIBG como supletoria en todo lo relacionado con dicho acceso.

La interpretación contraria conduciría, adicionalmente, al absurdo de que sectores enteros de la actividad pública o determinados órganos territoriales quedaran exceptuados de la aplicación del régimen de acceso previsto en la LTAIBG, siendo ésta, como es, una ley básica y de general aplicación. En definitiva, solamente aquellos sectores u órganos que cuenten con una normativa que prevea un régimen específico de acceso a la información que los redactores de la LTAIBG han entendido necesario preservar; aplicarán directamente dicho régimen y siempre con ésta última como norma supletoria.

V. Hay que tener en cuenta, finalmente, que la excepción prevista en la LTAIBG no realiza una enumeración taxativa de los procedimientos o áreas de actuación que cuentan con regímenes específicos, para no provocar, por ello, lagunas o introducir rigideces indebidas en el ordenamiento jurídico. Los regímenes mencionados en el apartado tres de su disposición adicional primera -el régimen específico de acceso a la legislación medioambiental, contenido en la Ley 27/2006, de 18 de julio, y el previsto en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público- lo son a título de ejemplo y admiten la consideración de otros



sectores, entre ellos estaría el contenido en los artículos 23 a 32 del Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, que establece el sistema de Archivos de la Administración General del Estado o las disposiciones que, en concreta normativa específica, prevean la reserva en el acceso cuando se den determinados condicionantes (secretos oficiales, secreto estadístico) y algunos otros”.

Esta interpretación fue acogida para un supuesto como el que aquí nos ocupa donde el solicitante de la información era un representante de los empleados públicos, por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 en su Sentencia núm. 93/2017, de 17 de julio, en la que se señaló respecto a la aplicación de la disposición adicional segunda de la LTAIBG en este ámbito lo siguiente:

“(…) Así, para poder aplicar esta Disposición, el objeto de petición de información debe contar con un régimen específico de acceso a la información que, atendiendo a la naturaleza de la misma, regule el alcance, procedimiento y garantías del mismo. En ningún caso el EBEP puede entenderse como una normativa específica a estos efectos, por mucho que regule detalladamente determinados aspectos procedimentales respecto de la representación sindical y la negociación colectiva en el ámbito de la función pública y vinculada más concretamente al deber de la Administración de proporcionar determinada información a estos efectos (...).

13. En todo caso, toda posible duda sobre el alcance de este precepto habría de ser solventada mediante la aplicación del principio «pro actione»”.

Los fundamentos de derecho de esta Sentencia fueron declarados válidos por la Sentencia en apelación, de 5 de febrero de 2018, de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

En consecuencia, el acceso a la información para los representantes de los empleados públicos regulado en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (cuyo texto refundido fue aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre) y en la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, no constituye un régimen de acceso específico a la información, puesto que en ambas normas lo que se recoge con carácter general es la función de los representantes de los trabajadores de recibir información sobre la política de personal, y no una regulación especial del derecho de acceso a la información pública en el sentido previsto en el punto 2 de la disposición adicional primera de la LTAIBG. Y, por analogía, lo mismo cabría señalar respecto a quienes representan a los sindicatos a través de las secciones sindicales constituidas. En este mismo sentido se ha pronunciado ya el Tribunal Supremo en su Sentencia núm. 748/2020, de 11 de junio.

En definitiva, el hecho de que una solicitud de información sea presentada por representantes de los empleados públicos, o por representantes de los sindicatos como ocurre aquí, no excluye que se ejerza a través de la misma el derecho de acceso a la información pública reconocido a todas las personas en la LTAIBG, ni restringe, por tanto, su objeto a las competencias propias de tales representantes.

Sexto.- En cuanto a la cuestión de fondo de la reclamación formulada, hay que partir de que el artículo 13 de la LTAIBG define la información pública como *“los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”*. Como ha señalado el Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, en la Sentencia 1519/2020, de 12 Noviembre 2020 (fundamento de derecho cuarto), refiriéndose a la definición que da el citado artículo 13 de la LTAIBG de información pública, *“esta delimitación objetiva del derecho de acceso se extiende de forma amplia, más allá de los documentos y la forma escrita, a los contenidos en cualquier formato o soporte, cuando concurran los presupuestos de que dichos documentos o contenidos se encuentren en poder de las Administraciones y demás sujetos obligados por la LTAIBG, por haber sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”*.

En el caso de la reclamación que ahora nos ocupa, la solicitud está relacionada con un proceso para cubrir vacantes de puestos de la Policía Local de León, convocado en virtud de lo previsto en la Orden General 06/2021, proceso llamado a conformar una documentación que ha de reflejar los aspirantes que concurrieron al mismo, la relación de méritos aportados por cada uno de ellos, y la valoración de dichos méritos que debió reflejarse en las actas elaboradas por los órganos de selección conforme a los Criterios de adjudicación de los destinos dentro del Cuerpo de la Policía Local de León determinados por el Intendente Jefe con fecha 17 de mayo de 2010.

Al haberse facilitado al reclamante la puntuación de los méritos aportados por todos los concurrentes a la provisión de una vacante en las Patrullas de Seguridad Ciudadana, convocada por la Orden 06/2021, se entiende facilitada la información solicitada en el apartado primero de la solicitud, referida a la relación de aspirantes que han concurrido al proceso de cobertura de la plaza.

Considerando todo lo anterior, en lo que respecta al primer punto del escrito de solicitud de información pública (relación de aspirantes que concurrieron a la convocatoria de vacantes), procede concluir que el reclamante ya ha visto satisfecha su pretensión.

Por otro lado, en la comunicación de la Jefatura de la Policía Local se añade que la relación detallada de cada uno de los méritos aportados por los interesados podría ser solicitada por los propios interesados, pero que un sindicato no debe conocer los datos personales sin autorización expresa, debiéndose relacionar esto último con la circunstancia de que D. XXX es un Delgado Sindical en el Ayuntamiento de León.

Con relación a este punto, cierto es que proporcionar la información pública solicitada por el reclamante, relativa a los méritos aportados por cada candidato al concurso convocado, implicaría facilitar datos de carácter personal de estos, tales como antigüedad en el servicio, cursos especializados realizados que implican conocimientos de determinadas materias,

conocimiento de idiomas, experiencia profesional, etc.; si bien estos datos no son de los que gozan de una especial protección a tenor de lo dispuesto en el artículo 15.1 de la LTAIBG.

En cualquier caso, junto con el derecho a la protección de datos personales, que constituye un límite al derecho de acceso a la información pública, debe ponderarse igualmente el interés público en la divulgación de la información según lo exigido en el artículo 15.3 de la LTAIBG. En este caso, cabría pensar que el interés público podría radicar en que, únicamente a través del conocimiento de los concretos méritos alegados por cada candidato, se podría determinar la regularidad de los procedimientos de selección del personal, siendo la calidad de Delegado Sindical del solicitante de la información un elemento más a tener en consideración puesto que, aunque no sea un órgano de representación de los empleados públicos, como sí lo son los Delegados de Personal y las Juntas de Personal (art. 39.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público), sí le corresponder en cierto modo velar por esa regularidad en el ámbito de actuación reconocido a los sindicatos, máxime cuando se habrían dirigido ciertas denuncias sobre posibles irregularidades a la Sección Sindical del reclamante, según lo indicado en el escrito de reclamación dirigido a esta Comisión de Transparencia.

En cuanto al segundo punto del escrito de solicitud de información pública (relación detallada de los méritos aportados por los aspirantes que concurrieron a la convocatoria de vacantes), y al tercer punto (actas de valoración de los méritos aportados por los aspirantes concurrentes, especificándose la valoración efectuada de cada uno de los méritos presentados conforme a los Criterios de adjudicación de los destinos dentro del Cuerpo de la Policía Local de León determinados por el Intendente Jefe con fecha 17 de mayo de 2010), a la vista de la documentación aportada por el reclamante podemos concluir que se le ha facilitado una relación de los aspirantes, identificados con nombres y apellidos, con la puntuación total atribuida a cada uno de ellos, y la puntuación correspondiente a los apartados de “antigüedad”, “titulación”, “currículo” y “cursos”; apartados que coinciden con los señalados en los Criterios de adjudicación antes indicados.

No obstante lo anterior, dichas relaciones, además de no especificar los méritos concretos de los candidatos a las vacantes que hubieran sido aportados y valorados, no parece que formen parte del acta del tribunal constituido para la valoración de los méritos, ni consta que sean un anexo del acta correspondiente, sino que, más bien, podría ser un documento elaborado “ad hoc” para dar respuesta a la solicitud de información presentada.

Las actas de los tribunales u órganos de selección deben ser elaboradas, precisamente, por una finalidad básica de transparencia, para que quede constancia y puedan ser conocidos por terceros (interesados o ciudadanos en general) los aspectos básicos de la reunión correspondiente, los puntos principales de las deliberaciones y los acuerdos adoptados.

En cualquier caso, no cabe duda de que todo lo solicitado por el reclamante es información que está a disposición del Ayuntamiento de León como consecuencia del

ejercicio de sus funciones y, por tanto, constituye información pública en los términos dispuestos en el precitado artículo 13 de la LTAIBG.

Séptimo.- No obstante lo anteriormente expuesto, el derecho de acceso a la información pública no es un derecho ilimitado o absoluto, en el sentido de que garantice el acceso a toda la información pública en cualquier materia a cualquier persona; por el contrario, este derecho se encuentra sometido a la posible aplicación de los límites o causas de inadmisión previstos en los artículos 14, 15 y 18 de la LTAIBG.

La información pública que en principio habría de facilitarse a D. XXX para dar completa satisfacción a su solicitud en los términos que ya hemos concretado contiene datos de carácter personal, tanto identificativos de los aspirantes a cubrir las plazas convocadas, como otros relativos a la antigüedad en el servicio, a cursos especializados realizados que implican conocimientos de determinadas materias, al conocimiento de idiomas, a la experiencia profesional, etc.; datos que, si fueran disociados conforme a lo establecido en el artículo 15.4 de la LTAIBG, harían que la información a la que se pretende acceder quedara desnaturalizada.

Con todo, nos encontramos con datos de carácter personal que, aunque no estén especialmente protegidos, nos conducen a la necesaria aplicación de lo dispuesto en el artículo 19.3 de la LTAIBG, según el cual:

“Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros debidamente identificados, se les concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. El solicitante deberá ser informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación”.

A tal efecto, el Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia 315/2021, de 8 Marzo (Rec. 3193/2019), en su fundamento de derecho cuarto, relativo a la *“Doctrina jurisprudencial que se establece en respuesta a las cuestiones planteadas en el auto de admisión del recurso de casación”* ha señalado lo siguiente:

“Aunque el trámite de audiencia regulado en los artículos 19.3 y 24.3 de la Ley de Transparencia aparece referido a dos momentos distintos y ante órganos diferentes, la finalidad perseguida en ambos casos es la misma: que las personas o entidades cuyos derechos o intereses puedan verse afectados por la información pública solicitada, y consecuentemente con la decisión que se adopte, puedan formular alegaciones.

Cuando en el procedimiento seguido ante el órgano administrativo no se ha dado trámite de audiencia a los interesados, si el Consejo de Transparencia tiene datos suficientes que permitan identificar a las personas o entidades cuyos derechos o intereses pudiesen verse afectados por la decisión que adopte, puede y debe



concederles un trámite de audiencia, con el fin de poder ponderar si el acceso a la información lesiona o no sus derechos o intereses.

El trámite de audiencia ante el Consejo de Transparencia no se condiciona, por tanto, a que los interesados hayan sido oídos previamente en el procedimiento tramitado ante el órgano administrativo destinatario de la solicitud de información.

La intervención del Consejo de Transparencia en fase de reclamación cuando constate que el órgano administrativo omitió el trámite de audiencia a los afectados puede adoptar las siguientes decisiones:

a) si los interesados están identificados o son fácilmente identificables, debe conceder un trámite de audiencia a los afectados y después adoptar la decisión de fondo que pondere los intereses en conflicto;

b) cuando desconozca la identidad de los afectados y no disponga de datos suficientes que le permitan una fácil identificación, puede ordenar la retroacción de actuaciones para que sea el órgano administrativo el que cumpla con el trámite de audiencia exigido por el art. 19.3 de la Ley de Transparencia”.

En este caso, esta Comisión de Transparencia competente para resolver la presente reclamación carece de los elementos necesarios para conocer la identidad de los afectados, por lo que, necesariamente, debe ser el Ayuntamiento de León el que lleve a cabo el trámite previsto en el artículo 19.3 de la LTAIBG, y permitir que puedan hacer sus alegaciones los aspirantes que participaron en los concursos para cubrir las plazas vacantes de Policía, como afectados por el posible acceso a la información pública, los cuales están perfectamente identificados para el Ayuntamiento.

La necesidad de que se lleve aquí a cabo dicho trámite de alegaciones, para que los terceros afectados puedan hacer las alegaciones que estimen oportunas, incluida su negativa a que se facilite la información para proteger sus datos personales, debe ponerse en relación con lo dispuesto en el artículo 15 de la LTAIBG, precepto donde se establece lo siguiente:

“2. Con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano.

3. Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal.

Para la realización de la citada ponderación, dicho órgano tomará particularmente en consideración los siguientes criterios: a) El menor perjuicio de los afectados derivado



del transcurso de los plazos establecidos en el artículo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español; b) La justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho o el hecho de que tengan la condición de investigadores y motiven el acceso en fines históricos científicos o estadísticos; c) El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos únicamente contuviesen datos de carácter meramente identificativo de aquéllos; d) La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se refieran a menores de edad".

El CTBG y la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante, AEPD), en aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la LTAIBG, adoptaron con fecha 24 de junio de 2015 un criterio interpretativo de aplicación de los límites previstos en los artículos 14 y 15 de esta Ley (CI/002/2015). A los efectos que aquí nos interesan, en este criterio interpretativo se afirma lo siguiente:

"El proceso de aplicación de estas normas (artículos 14 y 15 de la LTAIBG) comprende las siguientes etapas o fases sucesivas:

I. Valorar si la información solicitada o sometida a publicidad activa contiene o no datos de carácter personal, entendiéndose por estos los definidos en el artículo 3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD).

II. En caso afirmativo, valorar si los datos son o no datos especialmente protegidos en los términos del artículo 7 de la LOPD, esto es: a) Datos reveladores de la ideología, afiliación sindical, religión y creencias; b) Datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual, y c) Datos de carácter personal relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas. Si contuviera datos de carácter personal especialmente protegidos, la información solo se podrá publicar o facilitar: (...)

IV. Si los datos de carácter personal no fueran meramente identificativos y relacionados con la organización, el funcionamiento o la actividad pública del órgano o no lo fueran exclusivamente, efectuar la ponderación prevista en el artículo 15 número 3 de la LTAIBG. (...)".

(Las referencias a la Ley Orgánica 15/2019, de 13 de diciembre, deben entenderse realizadas a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales).

En atención a los argumentos parcialmente transcritos, el CTBG y la AEPD concluyeron lo siguiente:

"a) Los artículos 14 y 15 de la LTAIBG regulan los límites del derecho de acceso a la información que no operan de forma automática, sino que habrán de ser aplicados de

acuerdo con las reglas de aplicación y los elementos de ponderación que establecen la citada Ley y la LOPD.

b) El orden de ponderación opera desde el artículo 15 al 14 con los elementos que modulan la toma de decisiones. (...)”.

En el supuesto aquí planteado, de cara a ponderar el interés público de la divulgación de la información solicitada frente a los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en esta, hay que tener en cuenta que, como ya se ha indicado, el solicitante de la información pública es un delegado sindical al que le corresponden funciones que van más allá de intereses meramente particulares; así como que el motivo esgrimido para solicitar la información pública está relacionado con denuncias recibidas en el sindicato del que es delegado el reclamante sobre posibles irregularidades en la cobertura de vacantes. En sentido contrario, habría que tener en cuenta que los datos personales de los afectados a proporcionar no serían únicamente identificativos; así como que, en su caso, podrían afectar a la intimidad y/o seguridad de aquellos.

En consideración a lo anterior, y salvo otras cuestiones que hubieran de ser objeto de valoración, en particular tras las alegaciones que puedan aportar los terceros interesados, y de las que esta Comisión de Transparencia es desconocedora, existe en principio un interés público en la divulgación de la información solicitada, relacionado con la regularidad de los procedimientos de asignación de vacantes por vía de concurrencia competitiva; sin que, por otro lado, se evidencie un claro perjuicio para quienes obtuvieron las vacantes por el solo hecho de que se conozcan los méritos en virtud de los cuales se les adjudicó la plaza a la que aspiraron bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad.

En estos términos habrá de llevarse a cabo la ponderación que debe realizar el Ayuntamiento de León con el fin de resolver, mediante la oportuna resolución, la solicitud de información pública presentada por D. XXX sobre el expediente relativo a las provisiones de vacantes previstas en la Orden General del Cuerpo de la Policía Local de León 6/2021, de 19 de febrero, y, en particular, sobre el detalle de los méritos aportados por los aspirantes y la valoración de los mismos realizada por el Tribunal a los efectos de adjudicar las vacantes.

Octavo.- El artículo 22.1 de la LTAIBG establece lo siguiente:

“El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días”.

Asimismo, el artículo 22.4 de la misma Ley dispone lo que a continuación se indica:

“El acceso a la información será gratuito. No obstante, la expedición de copias o la transposición de la información a un formato diferente al original podrá dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de

Tasas y Precios Públicos, o, en su caso, conforme a la normativa autonómica o local que resulte aplicable”.

En consecuencia, el precepto señalado establece como preferente el acceso a la información por vía electrónica, salvo que el solicitante señale expresamente otro medio, y prevé, de forma específica, la posibilidad de que tal acceso se produzca a través de la expedición de copias, sin perjuicio de que esta pueda dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la normativa aplicable.

En el caso que aquí nos ocupa, lo solicitado fue el “*acceso telemático*” a la información interesada, por lo que por esta vía habrá de ser remitida al reclamante la información a la que, en su caso y tras el trámite de alegaciones señalado y la ponderación realizada en virtud del artículo 15 de la LTAIBG, se considere que debe acceder.

En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros,

RESUELVE

Primero.- Estimar parcialmente la reclamación frente a la denegación presunta inicial de una solicitud de información pública presentada por D. XXX ante el Ayuntamiento de León.

Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, el Ayuntamiento de León debe:

1.º- Dar traslado de la solicitud de información pública a los terceros cuyos derechos o intereses pudieran resultar afectados por el acceso a la información solicitada (participantes en la convocatoria para las provisión de vacantes previstas en la Orden General del Cuerpo de la Policía Local de León 6/2021, de 19 de febrero), para que, en el plazo de quince días, puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas, informándose a D. XXX de esta circunstancia, así como del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación.

2.º - Una vez efectuado el trámite anterior, y salvo motivos de oposición que lo impidieran de acuerdo con los razonamientos contenidos en el fundamento de derecho séptimo, dictar la correspondiente Resolución para poner a disposición de D. XXX la información pública que ha solicitado. Esta Resolución, además de al solicitante de la información, ha de ser notificada a los terceros afectados.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el acceso a la información en la forma señalada debe tener lugar cuando haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso administrativo frente a la Resolución que, en su caso, estime el

acceso solicitado sin que se haya formalizado o, en su caso, cuando este haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir la información.

Tercero.- Notificar esta Resolución a D. XXX, como autor de la reclamación, y al Ayuntamiento de León.

Cuarto.- Una vez realizadas las notificaciones señaladas, publicar la presente Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.

Esta Resolución es ejecutiva. Frente a la misma, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León que por turno corresponda en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8.3 y 46.1, respectivamente, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Tomás Quintana López